

POR JOSÉ LUIS ORELLA

15 AÑOS DEL BLANQUEAMIENTO POLÍTICO DE ETA



El 20 de octubre de 2026 se cumplen 15 años desde que ETA anunció el cese definitivo de su actividad asesina. La violencia de ETA dejó un balance oficial de 854 asesinados, miles de heridos y 180 000 exiliados fuera de las provincias vascas y del viejo reino de Navarra.

ETA fue una de las organizaciones más mortíferas que han existido en Europa, después de los grupos terroristas del Ulster. En Italia, las Brigadas Rojas asesinaron a 75 personas; en Alemania, la RAF (Fracción del Ejército Rojo) a 35 personas, y, en Francia, Acción Directa a 12 personas. Nada comparable a ETA, que se asemejaba más a los escuadrones de la muerte guerrilleros que ensangrentaron el mundo hispanoamericano. Antes de 1975, ETA ya había asesinado a 43 inocentes, aunque contaba con el favor internacional. Desde 1976, ETA tuvo entre sus objetivos a ciudadanos vascos que simpatizasen o militasen en formaciones de la derecha. A partir de 1982, con la victoria socialista, los socialistas entraron también entre los objetivos del grupo asesino. ETA acusaba y asesinaba después de una campaña de difamación contra las víctimas, llevada por los chivatos de los grupos abertzales, manteniéndose el silencio de la sociedad, de manera similar a la «omertá» de la mafia siciliana.

ETA estuvo a punto de ser aniquilada. La Policía detuvo en 1976 a 450 etarras, tras una operación realizada que finalizó con la detención de 87 personas relacionadas con el secuestro y asesinato del empresario Ángel Berazadi. La operación más relevante tuvo lugar el 20 de noviembre con la detención de los 300 miembros de la asamblea de ETA celebrada en el Monasterio de Aránzazu (Guipúzcoa). Sin embargo, desde el indulto real de noviembre de 1975 hasta el 17 de octubre de 1977, fecha en que entró en vigor la Ley de Amnistía, 1232 reclusos de ETA salieron de la cárcel de los que 678 se reintegraron en los escuadrones de la muerte de ETA.

La reorganización de una banda «muerta» favorecerá la ofensiva de «los años de plomo». Son los años que se ciñen al periodo constitucional y negociador sobre el proyecto de estatuto, que se verán manchados con la sangre de centenares de miembros de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de orden público y de la Guardia Civil, sumando a los ciudadanos derechistas, que con su desaparición consolidó la hegemonía del PNV en la zona rural vasca. Entre 1978 y 1980 serán 247 los asesinados.

Las víctimas de aquellos primeros tiempos fueron personas que podían ejercer un cierto liderazgo local y contribuir a la formación de un grupo simpatizante de una opción de derecha en alguna localidad vasca. Su muerte servía como ejemplo para impedir la vertebración a nivel local del partido político y aterrorizar así a sus posibles simpatizantes, después de sufrir amenazas, a exiliarse a otras provincias españolas dejando a sus votantes en manos del PNV como única alternativa frente a ETA. La impunidad quedó marcada con asesinatos que van desde el taxista de Guetaria, Manuel Albizu, en marzo de 1976; o el trabajador Vicente Soria, de Plasencia, dos semanas más tarde; a la emboscada al presidente de la diputación de Guipúzcoa, Juan M.^a de Araluce, quien iba a encabezar una opción conservadora vasquista no nacionalista, y que fue asesinado junto a los cuatro miembros de su escolta en junio del año siguiente; después fue el asesinato de Javier de Ybarra Bergé, expresidente de la diputación de Vizcaya, tras un secuestro de treinta días en el que fue torturado, como demostró la autopsia posterior. En octubre el asesinado fue el presidente en activo de la diputación de Vizcaya, Augusto Unceta Barrenechea, junto a sus dos escoltas.

La socialización del terror se complementará con las secuelas sufridas por las 2632 personas reconocidas oficialmente como heridas por los sicarios de la banda, a los que habría que sumar los secuestros de empresarios, profesiones liberales y representantes de consulados. ETA ha secuestrado a 84 personas, con el objetivo de extorsionarles y poder aumentar sus ingresos criminales, de los cuales 10 fueron asesinados. La ausencia de libertad para una parte importante de la sociedad que no podía tener candidaturas propias llevó a la ciudadanía vasca a la abstención, al exilio o a votar al nacionalismo vasco del PNV.

La experiencia de vivir en una sociedad donde se impone un poder invisible mediante la violencia sólo se ha visto en el Palermo de la mafia o en los estados del sur de los EE. UU., donde, entre 1877 y 1950, 4400 afroestadounidenses fueron linchados de forma pública con la complicidad de la sociedad y de las instituciones locales, que mantuvieron un régimen supremacista, dentro de una democracia.

Después de 15 años, en el presente, ETA no ha desaparecido, sus dedos enlutados en guantes anónimos se ven manejados por las facciones juveniles de la izquierda abertzale, Gazte Koordinadora Socialista

(GKS) y Ernai. La primera se encuentra en rebeldía contra Otegi y EH Bildu, a los que acusa de socialdemócratas, y, la segunda, la rama obediente al antiguo dirigente de ETA-pm. Ambas rivalizan por la hegemonía entre los jóvenes de la izquierda, intentando monopolizar las agresiones, amenazas, coacciones y actos de sabotaje a negocios de los considerados fascistas. Las instituciones públicas vascas o navarras, por el apoyo socialista, ayudan con su inacción al aumento del clima violento en Vitoria y en Pamplona. En los partidos de la selección nacional, incluso el alcalde bildutarra de Pamplona, por el apoyo socialista, llamó a los suyos a boicotear el visionado de los partidos, produciéndose pogromos contra la ciudadanía pacífica.

En el momento actual, ETA no necesita matar, es la coalición EH Bildu la que se ha transformado en una plataforma electoral con capacidad de sustituir al PNV en la comunidad vasca y se ha convertido en un apoyo parlamentario indispensable del Gobierno Sánchez. Sin embargo, la salida hacia el exilio de un 10 % de la población total del País Vasco (180 000 personas) por motivos de discriminación y amenazas, no ha sido reconocida. La consecuencia primera es la consolidación de la comunidad vasca como un elemento nacional con derecho a un proceso de autodeterminación en manos de un nacionalismo que rige sus estructuras de gobierno desde el inicio de la democracia, y que ha conseguido ir a un bipartidismo entre el PNV y EH Bildu. La segunda, el camino de la colonización del viejo reino de Navarra, por la colaboración del segmento socialista de la población navarra, que imposibilita que la derecha mayoritaria, pero sin mayoría absoluta, pueda gobernar siendo la minoría mayoritaria. La tercera, la política de memoria que ha transformado a los sicarios de ETA anteriores a 1977 en víctimas, que deben ser indemnizadas, mientras son abandonadas las familias de las personas que asesinaron. La cuarta, la ausencia de una ley que permita votar a los exiliados vascos, imposibilitando la entrega de aquellas regiones a partidos políticos supremacistas antidemocráticos; y, por último, el desastre económico, unas provincias que fueron el motor del desarrollo de España se vieron lastradas por el terrorismo que imposibilitó las inversiones y expulsó a los empresarios a impulsar sus proyectos en otras provincias. En la actualidad la economía vasca se mantiene artificialmente por la ayuda pública del Gobierno vasco que mantiene su posición protagonista por los conciertos económicos que regulan las relaciones financieras y tributarias entre las instituciones de las Diputaciones de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y la Administración General del Estado.